

ECUADOR: DERIVA AUTORITARIA Y LEVANTAMIENTO INDÍGENA Y POPULAR

Por Santiago Ortiz Crespo, Flacso Ecuador

Publicado por Clacso en el libro sobre protestas en Ecuador y América Latina, 12-2019

Los indígenas tomaron la posta al paro de los transportistas de octubre, pero elevaron el carácter del conflicto, de una lucha sectorial a una lucha general. De la reivindicación sectorial de los choferes se pasó a una demanda que cuestionaba la política económica y represiva del gobierno.

El movimiento indígena es el actor protagónico, pero es un movimiento con nuevas bases sociales y un cambio generacional en la dirigencia. También contaron con apoyo en sectores populares de la Sierra y la Amazonia. Hubo diálogo, pero se suspendió en medio de la persecución a los líderes, estableciéndose en los hechos una tregua: el gobierno aceptó la derogatoria del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles, continuando con las reformas económicas acordadas con el FMI.

En este artículo se examina el gobierno de Moreno y su alianza con las elites empresariales, para luego indagar el cambio del carácter del paro hacia un levantamiento indígena y popular. Posteriormente se examinará el mix políticas neoliberales-Estado de Excepción, que revela la deriva autoritaria del régimen, para situar el proceso de negociación, el sentido del levantamiento, bosquejando preguntas hacia el futuro.

1.- Antecedentes: el gobierno empresarial de Lenin Moreno

La coyuntura actual se produce como resultado de dos años de gobierno de Lenin Moreno, en donde se configuró una alianza con las cámaras empresariales, grupos de derecha y medios de comunicación. Fue un período orientado a “reinstitutionalizar¹” el país, desmantelando los cambios originados en la Constituyente del 2008 y en el periodo de la Revolución Ciudadana. Al mismo tiempo se trató de reconcentrar el poder en la nueva coalición y realizar las reformas económicas planteadas por el FMI.

Moreno ganó las elecciones con una propuesta de continuidad del periodo anterior y ampliación de los derechos sociales, pero formó una alianza anticorreista para extirpar del país al “odiado líder” y sus seguidores. Se planteó democratizar el país y planteó un esquema de diálogo que atrajo a grupos de populares maltratados por Correa. Incluso sectores de la

¹ El Presidente Moreno llamó la reinstitucionalización del país al proceso de reorganización del Estado, y lucha contra la corrupción: Lenin Moreno 4.-10- 2019 <https://www.elcomercio.com/actualidad/lenin-moreno-economicas-subsidio-zanganerian.html> (visto 21 10 19)

población que apoyaron a la Revolución Ciudadana, creyeron que el nuevo gobierno iba a mantener las políticas del anterior.

Sin embargo pronto se dio un nuevo giro en el comportamiento de Moreno al pactar con los Estados Unidos para entregarle a Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, e iniciar la colaboración militar y de inteligencia. Ese viraje se completó con la participación directa de los empresarios en las áreas de la economía en el gabinete. Igualmente los medios de comunicación privados plegaron al cambio de orientación del gobierno desde el “populismo perverso” hacia un régimen donde “reine la libertad de expresión” y la “división de poderes”. Pero la “tolerancia” del gobierno fue en los hechos un recurso para ganar tiempo para la campaña anticorrupción y el impulso de procesos judiciales vinculados al caso Odebrecht.

En el segundo año de gobierno, Moreno llevó adelante el referéndum para reconfigurar el Consejo de Participación, un dispositivo que había servido a la concentración del poder en el gobierno de Correa. En el llamado proceso de “reinstitutionalización” se formó un Consejo Transitorio, presidido por Julio C. Trujillo, un veterano político y abogado conservador, que se convirtió en jefe de la contrarreforma. Se trataba de reconcentrar el poder en torno al ejecutivo de Moreno, generando las condiciones institucionales para la persecución política a Correa.

Moreno actuó con eficiencia en el desmantelamiento del correísmo. Logró dividir Alianza País y establecer acuerdos con el Partido Social Cristiano, PSC, el movimiento CREO y la fracción Socialista de Enrique Ayala. Sus objetivos fueron cambiar la composición del Tribunal Constitucional, la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Electoral y la Fiscalía.

A finales de segundo año se dieron tensiones en la alianza: no había una fuerza política que articule la coalición dado que la fracción de Moreno tuvo un papel secundario en las elecciones seccionales, mientras la fracción correista, pese a intervenir en “una cancha inclinada” tuvo un papel significativo en Pichincha y Manabí; por otro lado la imagen del Presidente se desgastó en la medida en que no respondió a las expectativas populares ni logró sustituir en el liderazgo de Correa. Finalmente el acuerdo con el FMI terminó por desgastar la relación con indígenas y el Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Ya no fue suficiente la bandera de la corrupción, para cohesionar a esa heterogénea alianza.

El gobierno retomó la agenda neoliberal de los años 90, representada por el delegado empresarial en el gabinete y Ministro de Economía, Richard Martínez. Por otra parte el gobierno demostró su incapacidad para realizar reformas progresivas que beneficien a los sectores indígenas y populares y fue cerrando los canales de diálogo. En ese marco se actualizó la agenda de “seguridad nacional” por parte del Ministro de Defensa Oswaldo

Jarrin, un militar formado en la Escuela de las Américas y que apenas entró al gabinete firmó acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos². Por su parte la nueva Ministra de Gobierno María Paula Romo demostró su inclinación a la mano dura.

Durante este periodo la economía del país siguió en deterioro, tal como revelan los datos estancamiento del PIB y el ingreso per cápita: “Un estancamiento del ingreso por persona que de llegar a 6.347 dólares anuales en 2014, pasaría a 6.320 dólares anuales en 2019. Asimismo, se dio un recrudecimiento de la pobreza sobre todo rural: entre diciembre de 2014 y junio de 2019 aumentó de 35,3% a 43,8%”³.

Eso fue paralelo a la caída de los ingresos petroleros fiscales, el endeudamiento externo y las dificultades en la Balanza Comercial y de Pagos. En ese marco el gobierno implementó una agenda de austeridad fiscal reduciendo el gasto y enviando al desempleo a miles de trabajadores públicos. Este fue el sentido de la Ley de Fomento Productivo dirigida a beneficiar a los grandes empresarios con reducciones e incentivos fiscales, aparte de renunciar la soberanía cuando se produzcan conflictos con empresas, pues el país debe someterse a árbitros internacionales.

Hay que señalar que el estancamiento descrito se produjo en el marco de la dolarización, lo que complicó los problemas pues la economía está sometida a condiciones de baja competitividad, donde resulta más caro producir a precio de dólar que de peso o sol de los países vecinos que devalúan la moneda⁴. Esto afectó a los sectores que producen para el mercado interno, especialmente textiles, ropa, alimentos, que ven angustiados cómo se deterioran sus precios⁵.

En ese marco es que el gobierno firmó un acuerdo con el FMI, donde se confirmó el ajuste fiscal, la eliminación de los subsidios y la privatización. Esta agenda tiene también otros componentes como la flexibilización laboral. A cambio de ello el FMI da un préstamo de 4200 millones de dólares, que sumando otras fuentes supera los diez mil millones de dólares

Este acuerdo se mueve en la línea de fortalecer el modelo económico primario exportador comandado por el capital financiero, inducir una recesión, con una recarga de la explotación a los trabajadores y la expulsión al desempleo y subempleo a un importante sector de la fuerza de trabajo.

A ello hay que sumar la pérdida de legitimidad del régimen. Los ecuatorianos vivieron 15 años de crecimiento económico con amplia movilidad social y mejoramiento de las

² El ministro entró al gabinete cuando apareció “Guacho” en la frontera, un jefe de una banda de narcotraficantes; con ese pretexto se firmó el acuerdo de cooperación militar con el gobierno norteamericano.

³ Acosta y Cajas, 2019, Ajuste del FMI: cuentas sin cuadrar. <https://lalineadefuego.info/2019/08/20/ajuste-del-fmi-cuentas-sin-cuadrar-por-alberto-acosta-y-john-cajas-guijarro/> 17 10 2017

⁴ La dolarización se complica por varios problemas como el deterioro de la balanza de pagos, Mateo Villalba lo analiza en Dos décadas de dolarización ¿Qué hemos aprendido sobre este esquema monetario? En Villalba Mateo, editor, 2019, Dolarización dos décadas después, Congope, Abya Yala, Incidencia Publica, ITE, Quito Ecuador Pág. 7-42.

⁵ Ospina Peralta, Ecuador contra Lenin Moreno, <https://nuso.org/articulo/ecuador-lenin-moreno/>

condiciones de vida, pero en los últimos cuatro años vivieron el declive. Amplios sectores se ilusionaron con que Lenin Moreno mantenga en marcha la locomotora económica y social liderada por Rafael Correa, quien creó una ilusión de progreso. Moreno no pudo reemplazar el liderazgo del anterior presidente, de manera que se creó un vacío en el vértice del poder. Todo ello produjo desconcierto en la población, en donde se notó la baja de la confianza en las instituciones y en la popularidad del mandatario⁶.

Este, aunque no era un representante orgánico de las elites, contaba con el respaldo de los empresarios, de los medios de comunicación y de las Fuerzas Armadas. En ese contexto el gobierno aprueba el decreto 883 con el que se retira los subsidios a los combustibles elevando los precios de la gasolina extra a \$ 2,30 el galón y el diésel a \$ 2,27, esperando recuperar 1500 millones de dólares por estas medidas.

2.- EL PARO INDÍGENA Y POPULAR⁷

La respuesta vino primero de los choferes, que decretaron el paro pues las medidas les afectaba directamente. El sindicato de los choferes es un gremio con presencia en todo el país, con cooperativas y sindicatos de base en cada cantón, que gestionan una actividad económica estratégica y que debido al carácter de su actividad requiere canales de negociación con los municipios, la policía y el Estado. Es un gremio heterogéneo con varios colectivos a su interior con sus particulares intereses y demandas: los transportistas pesados mandan en el gremio y tienen mayor poder económico, hay los llamados “monopolistas” del transporte que tienen varias unidades, pero hay choferes urbanos que tienen una unidad y muchos trabajadores asalariados. Incluso hay un sector de choferes del transporte rural vinculado con las comunidades indígenas. Muchos viven en condiciones precarias, sostenidos en el bajo precio de los combustibles y con el techo de tarifas que les amenaza su propia sobrevivencia. Un cambio brusco entre el techo de costos y de ingresos significa el quiebre económico y abandonar el único medio que tienen para sobrevivir, en un marco en donde se acentúa la competencia con el Uber y otras cadenas internacionales.

Como gremio ellos tienen una ventaja: no fueron tocados por el régimen anterior. El gobierno de Correa restringió la influencia de otras organizaciones sociales⁸, excepto en el caso del gremio de choferes con el cual negoció permanentemente, con subsidios, cuotas de importación y otras facilidades⁹. Por ello llegaron con una organización fuerte al 2017.

⁶ En las encuestas de octubre el 83% respondió que estaba “angustiado” y “pesimista” ante la situación del país y el 86% no le creían los discursos del Presidente. También el 73% estaban en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles: Click Report <http://www.clickresearch.ec/index.php/click-report>

⁷ Se habla del paro, pero en la práctica es un “levantamiento”, un repertorio utilizado por los indígenas en los 90.

⁸ El régimen de la Revolución Ciudadana estableció un régimen de control de las organizaciones sociales y la descorporativización del Estado (Ortiz, Régimen y Red de Maestros, 2019).

⁹ Stoessel. Soledad. 2017. “Estado y representación política durante el ciclo posneoliberal: El vínculo entre poder gubernamental y transportistas en Argentina, Bolivia y Ecuador”. Universidad Nacional de La Plata. Acceso el 10 de octubre de 2018. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1568/te.1568.pdf>.

El aumento de los combustibles les golpea frontalmente tomando en cuenta el clima de declive económico. El paro del jueves 3 de octubre fue protagonizado por ellos: sacaron las unidades de circulación, se colocaron en sitios estratégicos de ingreso a las ciudades y paralizaron todo el país¹⁰. Sin embargo los dirigentes del transporte se retiraron el viernes 4, con la promesa del gobierno de revisar las tarifas.

A pesar de ello muchas cooperativas de buses urbanos y taxis siguieron en la paralización acusando a sus líderes de traición; hay que tomar en cuenta que el aumento de las tarifas se quedó en el limbo: el gobierno aumentó los combustibles y dejó que los alcaldes municipales -que tienen a su cargo la competencia del transporte- eleven las tarifas. Esto sucedió de manera irregular ya que estos no se animaron a aumentar los pasajes, debido al costo político de esta decisión.

Sin embargo el estallido producido el jueves 3 y viernes 4 tuvo un efecto inesperado: fue el detonante de una movilización diversa y casi espontánea en la cual los indígenas retomaron un lugar protagónico. El paro de choferes rompió la válvula del descontento: los indígenas, pero también campesinos, pobladores y estudiantes, tenían demandas represadas desde hace años, que salieron a la superficie. De esa manera la arquitectura del gremio del transporte, con presencia en cada pueblo y ciudad, fue la base de un levantamiento general de un significativo sector popular.

En el marco de cinco años de estancamiento económico y de pérdida de brújula política, cada sector fue acumulando frustraciones y demandas. Los indígenas no cuentan con ingresos para pagar la movilidad de sus hijos y los insumos de la agricultura, aparte de ver reducido el empleo en la construcción. Los estudiantes preocupados por la reducción del presupuesto estatal a la educación pública, sin perspectivas de conseguir trabajo en el futuro. Los trabajadores informales vendiendo menos productos debido a la reducción del mercado de consumo. Las mujeres con mayor carga del cuidado, con menores salarios y menor estabilidad en el mercado de trabajo. 25000 trabajadores públicos expulsados de sus puestos. Los sectores medios con miedo de perder su confort logrados por un periodo de crecimiento económico, los grupos vulnerables con pánico de bajar a la pobreza y los pobres de ser sometidos a la sobrevivencia.

Todos los estratos sociales se sienten al borde del abismo: la subida de los combustibles no solo tiene un impacto específico en el aumento del costo de la vida, sino que produce una sensación de vértigo, la gente intuye que se acabó el proteccionismo estatal y el “boom” que se vivió desde inicios de siglo. El paro de los choferes fue el que rompió la válvula del descontento de una población que acumulaba malestar debido a cinco años de crisis, esperando que el nuevo gobierno resuelva sus demandas.

¹⁰ Varias provincias, como Carchi y Bolívar realizaron fuertes paros semanas anteriores.

El movimiento indígena, que venía de un periodo de repliegue, tomó la iniciativa¹¹. No lo hizo de manera programada y desde la dirigencia, sino que obedeció a un impulso desde las bases, con un alto contenido de espontaneidad, pero también con colectivos indígenas afectados por la minería o la explotación del petróleo. Todo ello empleando las redes organizativas construidas en cada provincia por la CONAIE.

Hay que anotar que la composición social de esta organización ha cambiado, sus miembros no son predominantemente campesinos como en el primer Levantamiento de los 90: vienen de economías locales con intensa relación con el mercado, comerciantes, transportistas, productores, en una suerte de “capitalismo andino”; ellos están siendo afectados por la parálisis del sistema productivo. También en estas décadas de crecimiento se dio un proceso de diferenciación social tanto por la vía del mercado con clases y estratos acomodados en el comercio o las finanzas en las cooperativas de crédito, como en el Estado vía magisterio rural, funcionarios de municipios y gobiernos provinciales locales y técnicos de desarrollo.

Sin embargo hay que señalar que un sector significativo del movimiento es un estrato de trabajadores precarios. Son los que se mueven entre ser campesinos y proletarios, pero que ya dejaron de ser lo uno y no terminan de ser lo otro. Es el sector golpeado por la pérdida de dinamismo de la construcción, donde antes encontraban empleo y del estancamiento del mercado interno donde venden los productos agrícolas. Si durante la década “progresista” el Estado desarrollaba políticas para expandir la economía, su retiro provoca una profundización de las desigualdades. De allí que en el marco de una población indígena diversa, el nuevo levantamiento tiene como protagonista importante a los jóvenes que no encuentran empleo. Muchos de ellos viajan desde sus lugares de origen donde sobreviven de la pequeña propiedad, a las ciudades donde se ven rechazados por el mercado laboral.

A estos cambios sociales hay que sumar los cambios culturales: como señala Miriam Cisneros, “los jóvenes deben combinar dos mundos”¹²: por una parte la cultura comunitaria aprendida de sus padres, por otra la adopción de rasgos occidentales bajo el impacto de la educación, los medios de comunicación y el mercado de consumo, así como la diversificación religiosa, pues hay zonas donde la religión evangélica es predominante. Con una población diversa territorial, social, religiosa y culturalmente el movimiento indígena del 2019 no es el mismo del siglo anterior, pero retienen su identidad como indígenas articulados por la CONAIE y presencia política a través de los gobiernos locales que ganó con su brazo político, Pachakutik, en las últimas tres décadas. Esta identidad se activó contra el neoliberalismo en los 90 y las medidas fondomonetaristas en la actualidad, pero tiene un conflicto de largo

¹¹ Hay varias interpretaciones sobre el repliegue. Ver Ospina, 2009, Nos vino un huracán político: la crisis de la CONAIE, en Ospina-Kaltmeier, Los Andes en movimiento, CEN, Quito

¹² Cisneros Miriam, líder del Pueblo Sarayaku, entrevista realizada por el autor (22 10 2019)

plazo contra las formas de opresión étnica, conflicto no superado pese al avance en los derechos colectivos y la declaración de Estado Plurinacional en la Constitución del 2008¹³.

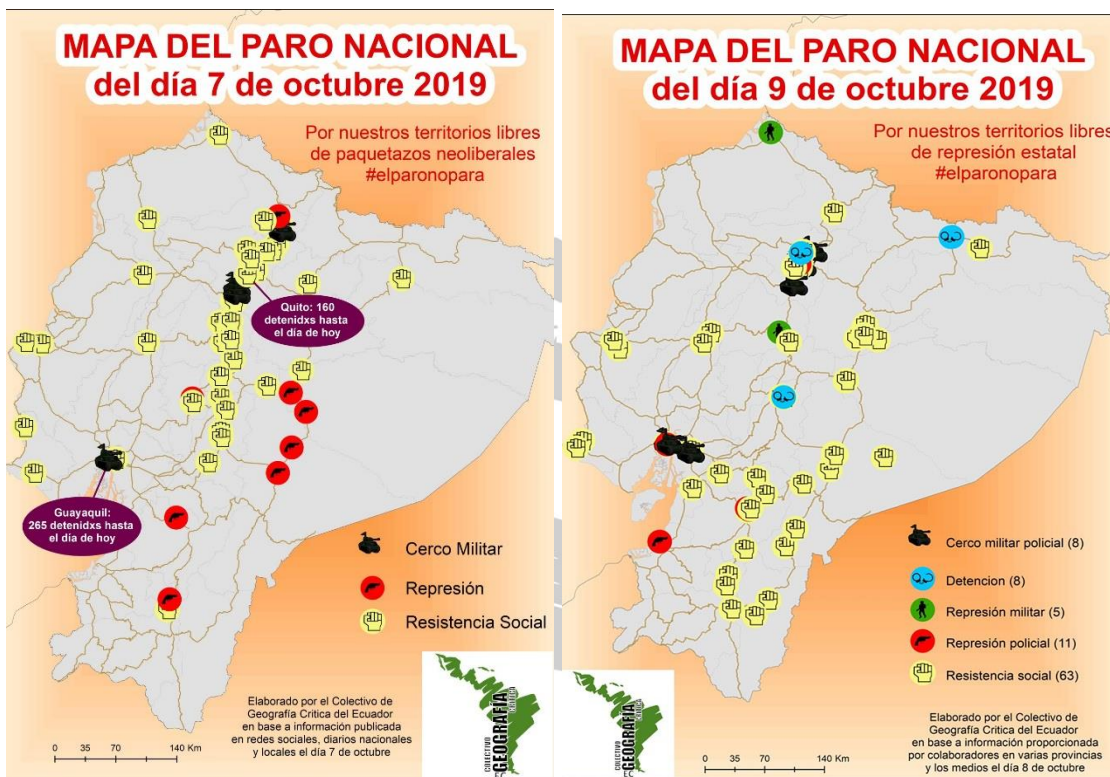
Además de dichos cambios la base comunal de pueblos y nacionalidades también se ha modificado. Esos organismos que fueron la base de los anteriores levantamientos no son hoy lo que fueron en los 90. Ahora hay una comuna más abierta y flexible, que tiende redes entre el campo y la ciudad, que maneja los páramos, el agua y la tierra, pero también el capital y los recursos del mercado. Sostenida en redes familiares, amplían su influencia a todo el país, inclusive en ciudades como Guayaquil. Tienen autoridad y competencias sobre temas de justicia indígena, gestión de servicios públicos, representación política, y sustentan los gobiernos locales. La dirigencia de la CONAIE también ha cambiado, salieron de la conducción los que lideraron al movimiento en los 90: estos fueron los que condujeron la lucha social y política y que tenían experiencia de negociación en los canales del Estado. La actual es una generación forjada con el ejemplo de sus padres en la lucha popular y menos institucionalizada, pero también más moderna.

Por otro lado el movimiento indígena vivió una etapa de repliegue después de su participación fallida en el gobierno de Gutiérrez. En el 2007 - 2008 coincidió con Alianza País y los contenidos plurinacionales en la Constitución, pero se distanció en el 2009 en los temas de minería, agua y en la educación bilingüe. Incluso varios líderes fueron judicializados por el régimen progresista, que atacó a la CONAIE.

Cuando llegó Moreno hubo un acercamiento con el gobierno en varias áreas de política pública. Pero el acuerdo con el FMI le distanció y la Conaie resolvió romper el dialogo y realizar un paro para el 15 de octubre¹⁴. Pero cuando los dirigentes de choferes se retiraron del paro las bases indígenas impulsaron a su dirigencia y tomaron la posta de la movilización. La primera semana de octubre había colectivos movilizados en la Sierra andina, pero también en la Amazonia.

¹³ En un marco donde sobrevive el racismo de las clases medias altas y de los medios de comunicación, que describieron el paro como una “invasión” (Ultimas Noticias, 22 10 19) Jaime Nebot, ex alcalde de Guayaquil recomendó “que los indígenas se queden en el Páramo” <https://www.youtube.com/watch?v=M5BoU73zJ2E>, 22 10 19)

¹⁴ <https://conaie.org/2019/09/26/jornada-progresiva-de-lucha/>

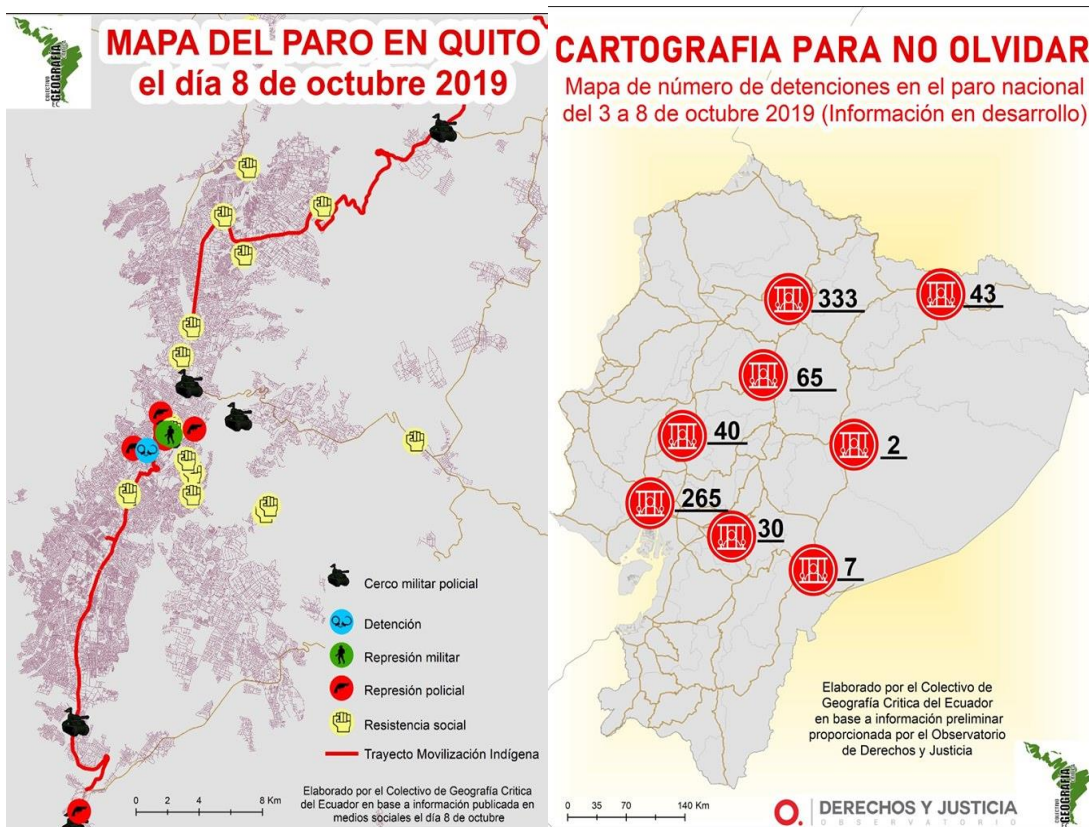


Fuente: Geografía Crítica <https://geografiacriticaecuador.org/> 16 10 19

El repertorio cambió. Si bien los choferes cortaron la traspportación, los indígenas se movilizaron en 300 puntos del país el día lunes 7, martes 8 y miércoles 9, iniciándose la toma de varias gobernaciones¹⁵. Inclusive se encaminaron a Guayaquil, pero la Alcaldesa socialcristiana Viteri resolvió cortarles el paso con camiones colocados en los puentes de ingreso a la ciudad. Todo ello reveló que los indígenas tienen presencia nacional.

El 9 se dio la movilización principal en la capital que evidenció la fuerza del movimiento. Fue una marcha masiva de jóvenes indígenas, alrededor de 30.000, que venían de diversas provincias y municipios. Ellos portaban palos, y se enfrentaban a los policías que portaban diverso tipo de armas y blindados, en un operativo ejecutado en el marco del Estado de emergencia. Así en la marcha salió a la superficie el ánimo combativo de los unos y la disposición represiva de los otros.

¹⁵ De acuerdo con la información del Ecu 911 de la policía el 3 de octubre se realizaron 293 manifestaciones en el país, el 9 hubo 252 y el 13, 220 focos de protesta. Hubo 392 cierres en vías principales, 1228 vías internas urbanas y rurales cerradas, En Quito hubo 1400 sitios afectados por los enfrentamientos, (Diario La Hora, 17 de octubre, B2).



Fuente: Geografía Crítica <https://geografiacriticaecuador.org/> 16 10 19

Al día siguiente de la marcha se realizó una asamblea de la CONAIE en el Ágora de la Casa de la Cultura, evento que se constituyó en una esfera deliberativa del conjunto del movimiento en torno a una gran “comuna”¹⁶ indígena y popular, conducida por el líder del Movimiento Indígena de Cotopaxi, MIC, Leónidas Iza. En ella participaron más de 3000 indígenas y escucharon las voces de los dirigentes provinciales y del FUT, todos decididos a seguir en el paro. También interpelaron al Estado y los medios de comunicación, pues estaban allí policías y periodistas a los que se pedía que relaten a las autoridades y los medios “la verdad de los hechos” que estaban ocultando. La asamblea, que fue difundida en vivo y en directo por las redes alternativas resolvió tres puntos: la derogatoria del decreto 883 de aumento de los combustibles, la destitución de los Ministros Romo y Jarrin, y la derogatoria del estado de excepción, como condición para dialogar con el gobierno sobre otros temas agrarios y las demás reformas establecidas con el FMI. Igualmente hicieron un llamado a otras organizaciones como el FUT, estudiantes, pobladores y mujeres a unirse. Además plantearon un proceso de enjuiciamiento del Estado en conjunto de los organismos de derechos humanos.

¹⁶ Moreano, Alejandro, 6 10 19, Por el establecimiento de Comunas Populares <https://ecuadortoday.media/2019/10/06/por-el-establecimiento-de-comunas-populares/>

El gobierno decidió de manera inesperada trasladar la sede del gobierno desde el Palacio Carondelet en Quito a Guayaquil, donde Moreno se sentía más seguro y más cercano a la

elite empresarial y política que domina el país. Esto podía ser interpretado como un signo de debilidad, pero también una táctica envolvente para cercar a los manifestantes que se movilizaban para el Palacio Presidencial. Igual la Asamblea nacional no funcionó durante la crisis, de manera que los indígenas llegaban a esos dos edificios, sedes y símbolo del poder y los encontraban vacíos.

Sin embargo el centro histórico de Quito estaba blindado por murallas de policías, con tanquetas y gases de diverso tipo, pedigones y rifles, protegidos por muros metálicos que impedían el paso. Igualmente las Fuerzas Armadas y la policía hicieron un gran despliegue de fuerza en todo el país. La estrategia represiva tuvo un componente psicológico en función de provocar miedo de manera sistemática¹⁷. Y todo ello ocultado por un amplio cerco mediático, que solamente se pudo romper mediante las redes sociales.

Según los informes de derechos humanos durante el paro hubo 10 fallecidos, 1340 personas con atención médica y 1192 detenidos¹⁸. También se denunció que 9 medios de comunicación fueron censurados y que la policía atacó a las Universidades Católica, Salesiana y la Casa de la Cultura, centros humanitarios donde estaban reposando los indígenas, con muchas madres y niños.

Hay que señalar que la población apoyó la movilización, aplaudieron a los indígenas cuando pasaban por las carreteras y participaron de manera creciente. La brutal represión fue un combustible de la movilización, pues a los indígenas salieron para rechazar no solo la derogatoria de las medidas sino la contención del operativo represivo. Quito fue el epicentro del movimiento indígena, donde también el movimiento barrial ocupó los espacios públicos durante la segunda semana e intervinieron masivamente en el último evento: el cacerolazo¹⁹. Toda la ciudad, inclusive los barrios de clase media, se expresaron con el ruido de las ollas, con movilizaciones pese al toque de queda.

Durante estos once días de movilizaciones hay sectores que expresaron su simpatía de diversa forma y muchos jóvenes estudiantes y pobladores se movilaron en varios puntos o dieron apoyo logístico a los indígenas. Igualmente se dio una marcha de 4000 mujeres en las calles del centro norte de Quito. En la logística del movimiento intervinieron varios gobiernos

¹⁷ Hernando Patricia, http://sabemos.es/2015/11/27/doctrina-del-shock-el-miedo-de-la-poblacion-como-arma-politica_9441/?fbclid=IwAR2IK-QO9fDpK5daOeMWSXWejtrSLlaq2RHOS5WSsz_Ao5Ennr7bknmc-OA

¹⁸ Verdad, justicia y reparación, Informe de verificación sobre derechos humanos, Alianza de Derechos Humanos, Quito, Octubre 2019 p. 29, 57, 70

http://www.cedhu.org/images/cedhu/areas_accion/publicaciones/investigaciones/pdfs/Informe%20Final%20Alianza%20DHH%20Ecuador%202019.pdf

¹⁹ Varios observadores recordaron con esta ocasión la movilización de la “Guerra de los cuatro Reales” cuando un alza de cuarenta centavos en el transporte público provocó una movilización de los barrios y estudiantes de Quito durante un mes. (abril de 1978)

locales. Igualmente en la acogida humanitaria de los indígenas participaron las universidades, donde intervinieron cientos de estudiantes, jóvenes médicos, enfermeras, trabajadoras

sociales, abogados, psicólogas, etc. Todo ello articulado por una densa red de medios de comunicación alternativos.

El paro fue un espacio para el encuentro de los sectores populares, para la afirmación de nuevas relaciones de socialización y comunicación, para el estreno de una nueva generación de jóvenes indígenas, los hijos del levantamiento del 90, junto con jóvenes estudiantes y profesionales de clase media. Si bien días después del paro se hizo un evento para la elaboración de una *Propuesta alternativa al modelo económico y social*²⁰, el sentido medular de la acción colectiva estuvo en la impugnación al FMI y la política del gobierno, paralizando el país e interfiriendo en los circuitos del transporte, el mercado y la economía.

En la orilla contraria se tomaron iniciativas “por la paz” entre las que se cuenta la formación de una “Junta Cívica en Quito”-convocada por las cámaras y los ex alcaldes- y la convocatoria de una marcha masiva en “defensa de Guayaquil”, por el ex alcalde Nebot – actual candidato a presidente de la república- y la Alcaldesa Cinthya Viteri.

La declaración de Nebot fue ilustrativa del discurso racista y regionalista, cuando dijo a los indígenas que “se queden en el páramo”. La presencia de delincuentes que recorrieron algunos barrios del norte de la ciudad y el libreto de los medios respecto a la agresión al patrimonio de Quito, hizo que varios sectores medios/altos se pongan a la defensiva frente a los manifestantes, a los que se acusa de vándalos; inclusive se dieron connatos de confrontación entre barrios de sectores acomodados y pobladores de barrios populares los días finales del paro. Ya para el día sábado 12 se cerraron varios negocios y en general se paró la actividad económica especialmente en Quito y en las provincias con presencia indígena²¹.

3.- LA DERIVA AUTORITARIA DEL RÉGIMEN

Con el Estado de Excepción el gobierno desplegó una ofensiva descontrolada contra la población, funcional a la imposición del paquete de medidas económicas. Ya antes de la medida se evidenció una pésima gestión del conflicto por parte del Presidente Moreno y de su Ministra de Gobierno María Paula Romo²², partidaria de la mano dura de la policía contra el pueblo.

El Estado de Excepción fue aplicado de una manera inédita en el país con una estrategia policial²³ de sometimiento a la población. Las Fuerzas Armadas actuaron en las vías y lugares

²⁰ https://drive.google.com/file/d/18HrMmAs8fFUo8lkJKNgHO2ZYurG_XbrDE/view

²¹ Se dieron varias acciones de saqueo durante el paro de choferes en Guayaquil

²² Ministra de formación liberal de Ruptura de los 25 un grupo de la elite social del país que surgió en medio de la crisis del régimen neoliberal.

²³ La policía asumió un rol como actor político desde el intento del golpe de Estado a Correa en el 2010. Para el Ecuador el uso desproporcionado de la fuerza y el resultado en el número de víctimas, no tiene precedentes en los últimos 50 años.

estratégicos y en garantizar el Toque de Queda. La dimensión del operativo de represión, reveló un giro que modifica el carácter moderado de las Fuerzas Armadas²⁴.

Se trata de una estrategia de represión desmedida, con el uso desproporcionado de la fuerza que convierte a la sociedad civil en objetivo militar y proscribire las libertades y derechos. El resultado es un alto número de víctimas, entre los cuales se encuentran indígenas, periodistas, mujeres, que han sido maltratados, violentados y sometidos a procesos judiciales arbitrarios.

La estrategia del Estado tiene también un componente de criminalización de la protesta y utiliza elementos dirigidos a atemorizar a los manifestantes. Eso fue lo que manifestó el Ministro de Defensa cuando señaló que las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra y amenazó con el uso de armas letales contra la población. El gobierno desplegó un discurso sistemático con un libreto dirigido a desprestigiar a los actores de la protesta; primero a los choferes, luego a los indígenas acusándoles de delincuentes y responsables de los desmanes, posteriormente atribuyeron a venezolanos y finalmente a los correístas.

Es la búsqueda de un enemigo interno que legitime la represión²⁵. Es un libreto que siguieron fielmente los medios de comunicación que se convirtieron en recursos de propaganda del gobierno: ellos ocultaron la protesta, desvalorizaron la lucha social y focalizaron la información en la violencia, poniendo como ejemplo la quema de la Contraloría y casos como la ruptura de vidrios en el Hotel Colon²⁶. La Conaie denunció que fueron infiltrados—que incluso fueron detenidos por los propios indígenas— los que quemaron el edificio de la Contraloría²⁷.

Hay que señalar que en el caso de Ecuador la deslegitimación de la protesta se realiza en el marco de una creciente preocupación de la población por la inseguridad. Desde hace varios años hay una sensación de que sube la delincuencia, siendo ésta una de las más relevantes preocupaciones que tiene la población. En ese sentido el gobierno utiliza ese caldo de cultivo para su estrategia de miedo y para estigmatizar a los manifestantes como generadores de violencia.

El texto del Decreto 884 se puede encontrar en <https://www.elcomercio.com/actualidad/decreto-excepcion-lenin-moreno.html>, 3 10 2019

²⁴ En Ecuador hubo experiencias militares represivas en los años 60 y gobiernos que se resistieron a la doctrina de la Seguridad Nacional como el gobierno reformista del Gral. Rodríguez Lara en los 70. El Gral. Moreira, el militar que dirigía el comando conjunto en esta coyuntura, fue removido el día siguiente del paro, pues presuntamente se desmarcó de la actitud represiva del régimen.

²⁵ Luego del dialogo el gobierno lanzó una campaña de persecución contra líderes indígenas, y apresaron a varios dirigentes de Compromiso Social (el sector correista). Varios se asilaron en la embajada de México.

²⁶ El Diario El Comercio, el principal de la capital, publicó titulares como “Saques y caos durante la movilización indígena” (8 10 19) “Vandalismo y bloqueo siguen, en vigencia toque de queda parcial” (9 10 19); “Radicalismo traba el dialogo y la economía se deteriora”(11 10 19)

²⁷ <https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910191089032378-justicia-ecuatoriana-reconstruye-quema-de-la-contraloria-ocurrida-durante-las-protestas/>

Esta escalada coincide con los procesos de militarización que se dan en América Latina, una tendencia orientada a construir Estados donde se criminaliza a la oposición política y la protesta, y se restringen las libertades y derechos fundamentales²⁸. Esto recuerda los regímenes de democracia restringida de los 80 y 90 que maquillaban el Estado de Derecho²⁹.

El Tribunal Constitucional aprobó el Estado de Excepción, cuando ya había violaciones a las libertades y tampoco vigiló su aplicación durante los días del paro. Las instituciones del Estado no funcionaron excepto la Defensoría del Pueblo que ha cumplido sus funciones constatando los hechos de violencia, pero el poder legislativo y el poder judicial, hicieron mutis por el foro. La Fiscalía por su parte firmó un acuerdo con Estados Unidos para colaboración en las investigaciones en torno al paro.

Ecuador asiste al desmantelamiento del “progresismo”, en una coyuntura en donde se culmina el viraje del modelo de acumulación. Es decir la “institucionalización” del país no logró recuperar el Estado de Derecho, sino propiciar una deriva autoritaria hacia un régimen represivo necesario para refundar el modelo económico, un régimen no sustentado en la división de poderes, sino en el predominio del ejecutivo. El retiro de los subsidios no son medidas puntuales ni casuales, sino parte de un programa que disfruta de un amplio consenso entre las elites, que sostienen un gobierno que no tiene liderazgo, pero que busca superar las “aventuras populistas” del pasado. El resultado de todo esto es un Estado Autoritario con maquillaje democrático, pero que no tiene legitimidad, institucionalidad democrática ni consenso.

LA TREGUA

La propuesta de la Conaie fue derogar las medidas, y en particular el Decreto 883 de retiro de los subsidios a los combustibles. Se decretó el Estado de Excepción el día viernes 4 y días más tarde el toque de queda. Desde el día viernes 4 que se inició la movilización indígena hasta jueves 10 no hubo negociaciones

Ese día el gobierno ofreció a los indígenas programas de desarrollo rural, es decir facilitar el acceso al agua para los regantes, reestructurar deudas de los campesinos, desarrollo de equipamiento e infraestructura de producción y otras medidas de desarrollo rural³⁰. CONAIE no aceptó dicha propuesta pues señaló que el problema central era la derogatoria del decreto 883 exigiendo el cese de la represión y la destitución de los ministros responsables, Jarrin y

²⁸ Se trata de régimen es que pierde control sobre la soberanía y que utiliza de manera preferente el sistema judicial. Esto es lo que se llama hoy un segundo Plan Cóndor. <https://www.nodal.am/2018/05/un-segundo-plan-condor-a-traves-del-golpe-judicial-por-carmen-esquivel/> 3 5 2018

²⁹ Cueva Agustín, 1988, .Las democracias restringidas de América Latina : elementos para una reflexión crítica Planeta,

³⁰ Crisis en Ecuador: las 6 propuestas del gobierno de Lenin Moreno para desactivar las protestas (y que no incluyen el subsidio a los combustibles) <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50000274> (27 10 2019)

Romo. La propuesta del gobierno fue ratificada por el Vicepresidente Otto Sonnenholzner en la mañana del día 9 y a la tarde la policía atacó los centros de refugio de los indígenas en las

Universidades de Quito y en la Casa de la Cultura, donde se encontraban niños, mujeres y estudiantes.

En general, la mayoría de los gobiernos locales no se pronunciaron durante el paro, pero finalmente la Asociación de Municipalidades AME intervino de buenos oficios consiguiendo la apertura del gobierno a una posible revisión de medidas. El día 13 a las tres de la tarde con el auspicio de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal se planteó una reunión directa entre el Presidente y los dirigentes de la Conaie. El diálogo fue público a través de la televisión y se pudo conocer la propuesta de los indígenas a través del Presidente de la Conaie Jaime Vargas y Leonidas Iza del MICC de Cotopaxi en torno a la derogatoria del Decreto 883. Se escuchó la posición del Presidente de la República y del Ministro de Finanzas que trataron de justificar las medidas; para ese momento el gobierno asumió un discurso en donde separaban la actuación de los indígenas de los correístas, acusando a éstos últimos de ser culpables de los desmanes.

El acuerdo fue publicado por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. En él “se deja sin efecto el decreto 883”. El día siguiente el gobierno publicó un nuevo decreto, el 894, derogando el anterior aumento de los combustibles.

Hay que subrayar varios aspectos sobre la estrategia de los actores. El consenso de los empresarios en torno a la validez del paquete de medidas, el discurso de criminalización de la protesta por parte del gobierno, la permanencia de los ministros Romo y Jarrin, así como el envío de proyectos de Ley de Crecimiento Económico revelan que el gobierno mantuvo su ofensiva contra los indígenas y la población y no tuvo intenciones de concretar una negociación. Con los choferes lo hizo porque era una demanda sectorial y tenían la solución prevista: el aumento de las tarifas, pero con los indígenas les fue difícil porque la envergadura de la movilización les tomó de sorpresa al gobierno y porque estos no estaban dispuestos a negociar demandas sectoriales, sino asumieron la representación del conjunto de la población en torno a la derogatoria del decreto; es decir elevaron su posición a un nivel que implicaba que el régimen retroceda en su programa económico. El gobierno se avino al diálogo porque la lucha se extendió a nivel nacional amenazando su estabilidad.

En relación a los indígenas hay que señalar que la lógica del levantamiento fue desde las bases, contando con jóvenes dispuestos a la confrontación y cuyo conflicto es frontal con el modelo que les expulsa del mercado y del empleo. A ello hay que agregar la existencia de una dirigencia que asumió un papel relevante asumiendo los intereses del conjunto de los sectores populares. Por su parte la Conaie aceptó la negociación pues mantenerla en condiciones de una represión indiscriminada implicaba un costo demasiado alto.

Hay que señalar un actor más en este proceso: la Revolución Ciudadana y al Correísmo al que el gobierno atribuyó los desmanes y acusó de manipular a los choferes y luego a los indígenas. Rafael Correa señaló que la crisis política creada por Moreno debió resolverse a través del adelanto de las elecciones, en ese sentido planteaba una propuesta diferente a la Conaie, focalizada en la destitución del mandatario, más que en la derogatoria del aumento

de los combustibles. Sobredimensionando sus fuerzas, sin contar con una base social organizada, su estrategia subordinó todo a las urnas, sin analizar la importancia de la movilización social para cambiar las relaciones de fuerza. Es evidente que hay en algunos sectores de la población una nostalgia por Correa –pues “con él estábamos mejor”– pero subirse sobre la cresta de la ola le visibilizó demasiado convirtiéndose en objeto de la represión y salió golpeado con la prisión de varios de sus dirigentes³¹. El gobierno acusó a los partidarios de Correa de los desmanes, deslegitimándole ante la opinión pública, mientras que la CONAIE mantuvo distancia del sector Correísta.

En resumen la negociación de gobierno y movimiento indígena fue larga y compleja, sin garantías para un diálogo consistente. Hay que señalar que los actores están constreñidos porque las estructuras de la economía ecuatoriana crujen con la dolarización y ninguna clase social quiere ceder sus posiciones en un momento de declive económico, pero también porque la confrontación se produce sin factores de mediación política, sin partidos, sin parlamento ni instituciones que protejan derechos, con un gobierno sobre determinado por los intereses empresariales, sin una brújula política de largo plazo.

CONCLUSIONES

El paro de los transportistas se transformó en un levantamiento indígena y popular que paralizó el país y tuvo como principal escenario a Quito. Fue un levantamiento con una duración de 11 días, que asumió diversos repertorios como cortes de carreteras y vías urbanas, participación de barrios populares, marchas en las ciudades, toma de edificios públicos, paralización de pozos petroleros, plantones y cacerolazos. Todo ello enlazado por redes sociales y con apoyo internacional y con la observación de organismos de derechos humanos de la ONU y la Corte Interamericana.

El levantamiento reconstituye un sujeto social y político como un actor clave en el país: el movimiento indígena que viene de un largo proceso de transformación interna, hoy aparece como un nuevo rostro más joven, más nacional, más popular, más diverso. Este actor también retoma su presencia luego de un periodo de repliegue por su intervención fallida en el gobierno de Gutiérrez en el 2003 y su fragmentación en el periodo de la Revolución Ciudadana 2007-2017, cuando el gobierno de Correa le sometió a un sistema de control y judicialización. Esto produjo un alejamiento entre la CONAIE y el gobierno de Correa, herida que aún no se ha suturado.

Si bien el eje del movimiento lo conforman los pueblos indígenas, con sus lazos colectivos y su forma de organización comunitaria, hay una participación de actores de diverso signo: jóvenes estudiantes, profesionales, artistas, barrios populares, choferes, campesinos, vendedoras de los mercados, con participación de las mujeres. El paro sectorial de los choferes se convirtió en un paro indígena popular por una demanda general que asumió un contenido político en la medida que cuestionó el aumento de los combustibles y su trasfondo en los acuerdos con el FMI, al tiempo que al Estado de Excepción.

³¹ El temor de las elites se acentuó luego del triunfo del peronismo en Argentina. Las elites tienen pánico de la probabilidad de un regreso de Correa.

En el contexto político es importante considerar que la reinstitucionalización, utilizando el Consejo de Participación y Control Social como palanca para desmontar la influencia correísta, al mismo tiempo desmanteló las instituciones, configurando un remedo de un Estado de derecho. El Estado de Emergencia, el Toque de Queda y el uso desmedido de la fuerza constituyen hitos de una deriva autoritaria a un régimen que no garantizan derechos ni libertades, tal como se desmontó durante el paro. En este hubo muchas víctimas, se atacó a las universidades y centros de refugio, se aplicó una estrategia de miedo y criminalización de la protesta. Se trata de una estrategia de represión que revela un nuevo rol de las fuerzas armadas y la policía.

El levantamiento produjo un cambio de fase en el país: la política económica se imbricó con una política represiva, con un gobierno sustentado en una fuerte cohesión de las elites. Aquel cuenta con la participación directa de los empresarios, los medios de comunicación privados y los partidos de derecha. Esta coalición se articuló en un discurso anti populista y asumió un programa inducido por el FMI.

En este sentido se puede agregar que la segunda ola de neoliberalismo hizo crisis en Ecuador más aceleradamente que la anterior, demostrando una débil capacidad de consolidación hegemónica, aunque cuenta a su favor con los medios privados de comunicación. La influencia de esta coalición en los sectores populares se fue desgastando en los últimos meses con la falta de liderazgo del Presidente y luego con la aplicación del programa económico.

Debido a las medidas y a la represión, se ha abierto una grieta entre el gobierno y la sociedad civil, mostrando conflictos étnicos y sociales. El levantamiento indígena popular fue una acción colectiva generada en medio de esa grieta, dejando atrás cualquier consenso previo. Por otra parte el movimiento indígena se legitimó, no solo porque tomó en sus manos una demanda sentida de la población, sino también porque demostró consistencia en un diálogo televisado ante todo el país.

Pero el dialogo fue un momento de un conflicto que no se resuelve, fue una tregua en medio de la polarización. Si bien se derogó el decreto 883, el gobierno no cesó en aplicar las reformas planteadas en el acuerdo con el FMI y tampoco destituyó a los ministros responsables de la represión³². En ese estrecho margen deberá actuar el movimiento indígena como un actor social y político renovado en el país.

En ese sentido queda planteadas varias interrogantes respecto a la orientación de las fuerzas que actúan en esta fase: la cohesión de la clase dominante que debe afrontar una disputa electoral en el 2021, la trayectoria del Estado, su consistencia y el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en el marco de la militarización creciente de América Latina, la capacidad que tenga el movimiento indígena para constituir un bloque popular autónomo y también la suerte del “Correísmo”, que tiene influencia en una corriente que se identifica con

³² El 17 de noviembre el parlamento por mayoría de votos negó el Proyecto de Ley de Crecimiento económico enviado por el Presidente Moreno, que planteaba los contenidos del acuerdo con el FMI. La Conaie considera esta negativa como una nueva derrota del gobierno.

MOVIMIENTO S

Sociales del Ecuador

él pero que no acierta a conformar una fuerza organizada con un proyecto coherente y una política eficaz.

